

Elecciones en Colombia 2014: ¿apuesta por la paz?

—» JOSÉ ALEJANDRO CEPEDA

Bogotá, 1974. Periodista.
Político, Pontificia
Universidad Javeriana.
Magíster en Análisis de
Problemas Políticos,
Económicos e Internacionales,
Universidad París III Sorbonne
Nouvelle y Universidad
Externado de Colombia.

En ocasiones las elecciones juegan un papel extraordinario, aun en países acostumbrados al juego electoral o donde rige técnicamente el Estado de derecho. Como si la democracia quisiera demostrar su capacidad de convocatoria y definición de rumbos, en algunos casos la alta polarización e incluso la violencia solo se resuelven dentro de la competencia entre ideas. ¿Podríamos afirmar que los comicios presidenciales celebrados en Colombia en 2014, bajo un sistema a dos rondas o de balotaje, en los que fue reelecto el presidente Juan Manuel Santos entran en esa categoría?

Antes de dar respuesta debemos recordar que América Latina en las pasadas décadas, en medio de la *tercera ola* democratizadora, como la denominó Samuel Huntington (1991), experimentó transiciones a la democracia y procesos de paz innovadores, donde las elecciones adquirieron una importancia que no en pocas ocasiones ha sido olvidada. Se trataba, nada menos, que de la recuperación central de la representación política, como ha insistido el politólogo alemán Dieter Nohlen (1995/2011). Por su parte, su colega brasileño Bolívar Lamounier (1984) acertadamente denominó el papel renovado de los comicios como *elecciones de apertura*, cuando países tan disímiles como Brasil, Uruguay o Nicaragua paulatinamente aceptaron de manera revalorada la competitividad electoral como vía para relegitimar el poder y dejar atrás el autoritarismo. Se trató entonces de un deshielo político y un paso vital, que si fue llevado correctamente dentro de un marco de continuidad permitió avanzar en la consolidación democrática.

Dentro del singular papel que pueden alcanzar los procesos electorales, más allá de elegir jefes de gobierno, congresistas, gobernadores o alcaldes, otra variante la constituyen momentos claves para definir el futuro. Así sucedió, por ejemplo, con el plebiscito nacional de Chile en 1988, que terminó por decidir la no continuidad de Augusto Pinochet en el poder, condensar el periodo de la concertación entre las alternativas partidistas opositoras y la apertura democrática del país austral. De esta forma, el caso particular de Colombia en 2014 nos plantea preguntas pertinentes, pues si bien efectivamente no se trató de consolidar una transición a la democracia o de cerrarle el paso a un dictador, sí tuvo como elemento central de debate y aglutinación el apoyo o rechazo de la sociedad al proceso de diálogo en Cuba que sostiene el gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la ilusión de alcanzar la paz.

Las presidenciales y sus protagonistas

Nos centraremos aquí en las elecciones presidenciales colombianas, que el 25 de mayo y el 15 de junio en primera y segunda vuelta definieron la continuidad del presidente número 59 en la historia del país. Este dato no es menor, pues se trata en efecto de una de las naciones con mayor estabilidad en el relevo democrático del poder en la región, ajena en líneas generales a golpes de Estado y dictaduras, más allá de las afectaciones que impone sobre la competitividad electoral un difícil contexto donde en cambio las amenazas al Estado de derecho y a la seguridad por guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares en las últimas décadas desataron a la vez una profunda crisis de derechos humanos.

Los protagonistas principales de la elección presidencial de 2014 constituyen justamente dos visiones contrapuestas de cómo resolver esa crisis, acumulada a lo largo de más de medio siglo: la apuesta por el diálogo con las FARC del presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos (2010-2014), y la propuesta de la continuidad de la lucha inflexible al terrorismo del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Este cisma entre dos de los hombres más poderosos de Colombia no es nuevo; ha venido escalando durante los últimos cuatro años, en los cuales Santos, el heredero al poder de Uribe —elegido ciertamente con el apoyo de los electores de este— se desmarcó y asumió un talante propio que desató la furia de su antiguo mentor. Es decir, se trata de una división profunda en el renglón centroderecha del espectro político, que en una reñida segunda vuelta obligó a las restantes fuerzas partidistas a asumir posiciones a favor o en contra.

¿Cómo se llegó a ello? Debemos señalar que tras doscientos años de experiencia republicana, la longevidad y estabilidad de las instituciones democráticas colombianas (algo que le ha costado reconocer tradicionalmente a los intelectuales locales, comenzando por el recién desaparecido premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez) se ha visto empañada por la persistencia de una violencia política vergonzante, que según las cifras del informe *¡Basta ya!* del Grupo de Memoria Histórica (2013) ha arrojado cerca de 220.000 muertes en el último cuarto de siglo, en la que la mayoría de víctimas son civiles, sin contar los millones de desplazados y despojados de sus tierras. Este panorama, que no es nuevo, intentó conciliarse con la desmovilización del grupo guerrillero M-19, la Constitución de 1991 que se concentró en recuperar el lenguaje de los derechos humanos, la paz y la reorganización de un Estado social de derecho, mientras se enfrentaban las condiciones del Consenso de Washington y la guerra fría llegaba a su fin. Y son precisamente los comicios para elegir el cuerpo constituyente en 1990 en Colombia los que más recientemente se acercan al tipo de definición particular de elecciones singulares que aquí se propone, pues se trató del rompimiento definitivo del sistema bipartidista predominante desde el siglo XIX y de una revolución retórica participativista que en medio de un marco violento tenía en ese momento al capo Pablo Escobar como principal amenaza.

Pero los últimos años de Colombia se parecen a ese fin de la historia de Francis Fukuyama (1992) que en realidad no ocurrió: ante el fracaso de extender la paz, la fragmentación subsiguiente del sistema de partidos y la volatilidad (producto de una clase política que no estuvo a la altura de las circunstancias y abusó de las generosas reglas de juego del sistema electoral), la figura del expresidente Álvaro Uribe significó la

búsqueda de imponer orden desde un discurso de derecha basado en la seguridad, que lo llevó a ser reelegido gracias a una coyuntural reforma constitucional a su favor. Producto de la clase terrateniente antioqueña y víctima de la violencia, había ejercido como alcalde de Medellín, gobernador de su departamento y senador, en una carrera meteórica en la que ofreció un liderazgo férreo frente a la crisis violenta. Lograría así (al no poder sus seguidores concretar una absurda y peligrosa segunda reelección que ponía una vez más en riesgo el equilibrio de la arquitectura constitucional y la separación de poderes a favor del Ejecutivo), dejar en el poder a su ministro de Defensa estrella, Juan Manuel Santos, quien una vez presidente traicionó su legado y optó por un proceso de paz discreto pero funcional en La Habana con las FARC, la guerrilla más vieja del mundo. Así, convertidos en enemigos, con la reelección de Santos en una polarizada segunda vuelta en que derrotó al candidato uribista Óscar Zuluaga —a quien se acusó de ser un mero peón de Uribe— y donde el principal tema de campaña fue el dilema entre la paz o la guerra, la mayoría de colombianos votaron por la continuidad del diálogo en Cuba, en una especie de plebiscito por su futuro.

AL

« Todos los colombianos desean la paz, pero aún no están de acuerdo en cómo debe lograrse »

La fuerza versus el diálogo

En la última década la conflictividad en Colombia cambió, como lo registró Caster Wieland (2008) comentando diez tesis en las que exponía el proceso sui generis en el que el país había avanzado hacia un posconflicto en medio del conflicto. Según Wieland, se trataba de un mejor equilibrio del ejercicio de la seguridad a favor de la recuperación de la presencia del Estado, obligando a las FARC a replegarse, al tiempo que se adelantaron negociaciones con grupos paramilitares (lo que recuerda que Uribe no ha sido ajeno a diálogos y acuerdos con actores armados no estatales). Los éxitos logrados por Álvaro Uribe respondieron así a revertir el fracaso de las negociaciones de paz previas sostenidas por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que terminaron en desplante de la guerrilla, en respuesta a un giro de la opinión pública a favor de la *mano dura*.

Sin embargo, como lo han señalado diversos observadores y lo reconoció el actual gobierno, el hecho de que en el presente Juan Manuel Santos haya podido embarcar al país en un proceso de negociación con las FARC solo ha sido posible por los logros en el combate a la guerri-

lla que se dieron durante los dos periodos de Uribe (2002-2010). Por entonces, el propio Santos fue responsable de las más importantes operaciones como ministro de Defensa frente a la insurgencia: Jaque y la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, la polémica intervención en territorio ecuatoriano en que murió el comandante Raúl Reyes; o, ya bajo su mandato, la caída del temible Mono Jojoy y la de Alfonso Cano. De aquí que la división discursiva del centroderecha en Colombia hiciera que sus votantes se sintieran inicialmente confundidos y luego altamente polarizados con miras a las elecciones de 2014, y ello arrastrara al resto de los partidos a esta dicotomía, pues los sectores de Uribe y Santos, reuniendo entre ambos la mayor convocatoria electoral, convirtieron la paz en el tema central de campaña, en una jugada arriesgada en la que Santos empeñaba su credibilidad y su futuro. Existe así una conclusión previa: todos los colombianos desean la paz, pero aún no están de acuerdo en cómo debe lograrse.

El actual proceso de paz ha puesto en el tapete situaciones novedosas, como el desarrollo de una Ley de Víctimas, un debate sobre justicia transicional, el rol de las víctimas, su reparación, la importancia de la memoria histórica y la función de un eventual perdón.¹ Este proceso de ajuste, reconciliación, revaloración humanista y reencuentro del proyecto nacional infortunadamente sin la participación decidida de la diezmada guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la bancada uribista —que posee cerca de ocho millones de votantes— sería una paz incompleta. Una paz en la que parte de la clase política (como lo ha señalado el mundo académico desde hace años) ha aceptado públicamente —por primera vez y siguiendo los conceptos de estu-

1 El apoyo que ha recibido la presente búsqueda de la paz en Colombia en la comunidad internacional ha sido importante, abarcando desde el significativo respaldo inicial del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y una ronda de diálogos con las FARC en Noruega, hasta declaraciones más recientes de los mandatarios de Estados Unidos, Barack Obama, y Rusia, Vladimir Putin. En el caso puntual diplomático y de cooperación de la República Federal de Alemania, por medio de su embajada en Bogotá y las fundaciones Konrad Adenauer, Hanns Seidel y Friedrich Ebert, por ejemplo, se han realizado en labor conjunta con instituciones académicas y periodísticas dos foros colomboalemanes denominados «Reconciliación, responsabilidad y memoria. Expectativas alemanas y perspectivas colombianas», donde el aprendizaje histórico es un elemento central, como lo ejemplifica la experiencia germana tras las dos guerras mundiales y su proceso de reunificación, una vez caído el muro de Berlín hace 25 años. Además, tras la visita oficial de Juan Manuel Santos en noviembre de 2014 a Alemania, Angela Merkel invitó a la Unión Europea a sumarse a la causa y oficializó un aporte de 75 millones de euros anuales hasta 2016, como fondo financiero a disposición de Colombia para la construcción de la paz y la reconciliación.

diosos de los conflictos como Johan Galtung (1969)— que un acuerdo con las FARC implicaría un importante avance, pero se limitaría a una *paz negativa*, en el sentido de que finiquitar la violencia armada es la puerta para avanzar en el posconflicto, donde habría que trabajar a favor de una *paz positiva*, en que estén garantizadas estructuralmente las condiciones mínimas de desarrollo y justicia para la mayoría de colombianos.

En cualquier caso, en La Habana se acordó, en contravía al espectáculo mediático y previa desmilitarización de la zona del Caguán en el sur del país durante la presidencia de Andrés Pastrana, una discreta agenda de negociación sin alto al fuego con las FARC, en torno a cinco puntos invariables, de los cuales se ha logrado avanzar con cierta concreción en tres (desarrollo agrario, participación política y drogas ilícitas), que se interpretaron como escalonados guiños de la guerrilla a la eventual continuidad de Santos en el poder. Si se tienen en cuenta «ampliar la democracia» y construir «bases sólidas para la paz», estos puntos son: 1. *Política de desarrollo rural* para el 46 % de los once millones de campesinos que se calculan en situación de pobreza (reforma agraria con búsqueda de propiedad y seguridad alimentaria); 2. *Participación política*: se buscará incentivar «mayor participación en la política nacional, regional y local para todos los sectores, especialmente los más vulnerables» y «acceso a los medios de comunicación» para los eventuales movimientos que surgieran de un eventual proceso de paz exitoso; 3. *Fin del conflicto*: «cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo», «dejación de armas y reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses», intensificar el combate de las «organizaciones criminales y sus redes de apoyo», así como esclarecer los reales alcances del fenómeno paramilitar en el país; 4. *Drogas ilícitas*: «sustitución con planes de desarrollo», «solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos»; 5. *Víctimas*: aclarar el destino y los responsables de las muertes violentas y las violaciones de derechos humanos en el conflicto (El Tiempo, 2012).

Sobre cada uno de esos puntos, las distintas opciones presidenciales tuvieron que tomar posiciones ante la ciudadanía, como se observa a continuación:

Juan Manuel Santos / Partido Unidad Nacional. El denominado Partido de la U sufrió una crisis de identidad no del todo resuelta, pues inicialmente se fundó para canalizar la fuerza electoral en torno a Álvaro Uribe, pero tras la elección de Santos y su distanciamiento con el expresidente, durante un tiempo pareció caer en cierta or-

fandad: incluso se rumoró que Santos estaría dispuesto a regresar y reunificar el Partido Liberal, el que otrora también fuera la casa de Uribe. Desclasificado de la derecha radical,² la bandera de *la U* al servir de plataforma para la reelección de Santos fue ayudar a «vender» el proceso de paz con las FARC. Obtuvo el segundo lugar con 25,69% de votación en primera vuelta y el triunfo con 50,95% en la segunda. El Santos que antes de ministro brillante del uribismo construyó su carrera como uno de los representantes tradicionales del establecimiento colombiano, y se movía con comodidad entre el periodismo como miembro de la familia que fue propietaria del periódico de mayor influencia nacional (*El Tiempo*), el Partido Liberal y como líder visible en gremios económicos, vio poco a poco afectada la imagen de la segunda parte de su primer gobierno. Ello, sumado a una campaña monotemática en torno al proceso de paz, hizo que esta inicialmente no fuera contundente. Su fórmula vicepresidencial fue Germán Vargas Lleras, liberal tradicional quien también escoró de ser un alfil del uribismo a candidato presidencial por cuenta propia en 2010 bajo el partido Cambio Radical, para después convertirse en la mano derecha de Santos.

La apuesta de Santos, como se dijo, fue arriesgada, pues aunque la economía colombiana ha mantenido un crecimiento aceptable (del 4,3% en 2013, dentro de las proyecciones del mercado y del gobierno, mientras que el producto interno bruto fue superior al 4% registrado en 2012) y se realizó una inversión importante en vivienda popular gratuita y planes de desarrollo (encabezada por Vargas), el candidato-presidente optó por no resaltar los logros de su mandato, concentrado en

2 Hay que recordar que una vez reelegido Santos retomó, incluso, su visión de lo que sería el centro político. Ya a finales de la década de 1990 había firmado un libro junto al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, titulado *La tercera vía: una alternativa para Colombia*. Con la presencia de los exgobernantes Fernando Henrique Cardoso, Bill Clinton, Tony Blair, Ricardo Lagos y Felipe González, además del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, envió desde Cartagena un mensaje claro al respecto. Santos aspira a avanzar en un estilo de gobierno liberal-progresista, que desea ver como la plataforma para una Colombia posconflicto. Se trata de retomar una vez más el eslogan de Tony Blair de una tercera vía, es decir, la búsqueda de un equilibrio entre economía abierta y protección social, que Santos ha resumido con la frase «tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario». Ante las críticas del uribismo de que un posible arreglo con las FARC abriría las puertas del castrochavismo, se puede plantear que técnicamente Santos por ahora no busca otra cosa que la defensa de un mercado y a la vez un intervencionismo redistribuidor, que está dispuesto a hacer coalición con otros sectores políticos, que apoya el crecimiento económico como clave para disminuir la pobreza y que su política exterior está basada en el diálogo y no en la confrontación.

la paz, mientras las críticas desde los sectores de izquierda y derecha no se hicieron esperar en torno a temas como la educación, los desastres ambientales que ha traído la minería (tanto la legal como la ilegal) y los retrocesos en materia de seguridad que fueron el caballo de batalla del discurso radical de derecha encabezado por Uribe. Como reacción, la actitud de Santos desde el inicio de su mandato ha sido la de evitar cualquier confrontación con Uribe, un libreto del que ha tenido que salirse forzosamente en ocasiones, y que en la última campaña rebasó sin perder el tono institucional que lo caracteriza como heredero y representante tradicional del establecimiento colombiano. La pérdida de soberanía en aguas territoriales frente a Nicaragua en torno al archipiélago de San Andrés y Providencia en el Caribe es de los pocos temas que no le pasaron factura durante los comicios, y que, aunque había afectado su imagen, no podía cobrarse por ser un asunto de vieja data y con responsabilidades presidenciales previas.

Oscar Iván Zuluaga / Centro Democrático. El ex ministro de Hacienda caldense es uno de los servidores públicos de raíz conservadora que se decantaron en fieles servidores del proyecto uribista. Alcanzó su posición de candidato tras ganar en la convención interna de su partido contra el exvicepresidente Francisco Santos quien, a pesar de su reconocimiento público como político y periodista, al ser primo del presidente creaba una imagen de renovación negativa que el propio Uribe no tardó en soportar. Por su parte, a Zuluaga le costó construir una imagen propia, pues en un comienzo fue visto como un simple avatar de Álvaro Uribe y convocaba escaso público en su campaña política a lo largo del país. Esto se produjo tras los tercos esfuerzos de su jefe para que el nombre e imagen del partido fueran los suyos por encima de la identidad de la propia candidatura de Zuluaga, algo que la autoridad electoral se empeñó en prohibir siguiendo las normatividades vigentes. Esto se corregiría solo hasta la segunda vuelta, cuando Zuluaga se convertiría poco a poco en candidato por mérito propio, aunque quedó en el aire la bucólica idea de apellidar al partido de Uribe como de *centro*, cuando directa e indirectamente sus valores representaron y representan una derecha radical.

La pobre visibilidad y el discurso del candidato emergieron finalmente a medida que la campaña de Santos tampoco despegaba. Los ataques de Zuluaga a Santos nunca alcanzaron el nivel de amarillismo

» El candidato-presidente optó por no resaltar los logros de su mandato, concentrado en la paz, mientras las críticas desde los sectores de izquierda y derecha no se hicieron esperar «

mediático que desarrolló en los últimos años Uribe a través de su cuenta de Twitter, y es considerable como un hombre mucho más prudente y de credenciales respetables, donde la ecuanimidad no está mal vista. En cualquier caso el «mantra» de Zuluaga se limitó a repetir las críticas de Uribe a una eventual entrega del país a las FARC, y llegó a ser el único candidato por diferenciarse, que no temió proponer la supresión de los diálogos de La Habana en caso de alcanzar al poder: una posición osada en un país en el que el grueso de la población de una u otra forma anhela la paz. Aunque fiel al pensamiento uribista, moderó y corrigió su posición entre la primera y segunda vuelta cuando condicionó su discurso guerrerrista a una real voluntad de negociación y alto al fuego de la guerrilla. Y cuando, además, obtuvo el respaldo de la candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, quien no se presentó como enemiga de una eventual salida al conflicto por medio del diálogo.

Ante la pobre campaña de Santos y la no existencia aún de un juego de coalición o apoyo de las terceras fuerzas en contienda, Zuluaga sorprendió al ganar la primera vuelta con 29,25 % de los votos, pero no le alcanzó el impulso en la segunda, en la que se quedó con el 45 %. Una derrota que Uribe se negó a aceptar, llegando a denunciar posibles fraudes del santismo, mientras su candidato, gallardo, reconoció la victoria del presidente. Sin embargo, sobre todo tras la primacía mediática de la selección colombiana de fútbol en el Mundial de Brasil, la presencia de Zuluaga desapareció prácticamente por completo de los medios de comunicación, aunque se anunciara que asumió el liderazgo del Centro Democrático. No se puede decir lo mismo de Uribe, quien elegido de nuevo como congresista ha sido uno de los animadores centrales de la coyuntura política —incluyendo un sonado debate en su contra por sus posibles vínculos con el paramilitarismo, entre otros, liderado por el izquierdista Iván Cepeda, del Polo Democrático— y es el principal y crítico acérrimo del segundo periodo de Santos.

Marta Lucía Ramírez / Partido Conservador. La candidatura de la ex ministra conservadora merece aplaudirse por lo meritorio de su esfuerzo ante la adversidad y los resultados obtenidos. El Partido Conservador, junto al Liberal uno de los pilares históricos en la dinámica partidista en Colombia, ha sufrido en los últimos años el dilema de servir al uribismo para sobrevivir o renovar su liderazgo. La segunda opción, sin duda la más sugerente, ha sido aceptada solo retóricamente, y se visualizó en la convención interna donde Ramírez, aunque elegida candidata, no contó inicialmente con el apoyo de su partido y tuvo que librar una lucha burocrática frente al sector más clientelista de su

colectividad, sensible a la denominada «mermelada» o repartición de prebendas por el gobierno de Santos, aun sin ser parte oficial de la Unidad Nacional que ha respaldado el gobierno de este desde el Congreso en una coalición del Partido de la U, Partido Liberal y Cambio Radical. Ramírez vio con estupefacción cómo se entablaba un proceso de demanda ante el Consejo Nacional Electoral en su contra, que concluyó a su favor y dejó la legalidad de la Convención en manos del Directorio Nacional Conservador. Esta lucha interna fue el punto de partida a una loable campaña.

Los resultados, basados en un discurso coherente, fueron la obtención del 15,52% de la votación, la tercera en la primera vuelta, lo que la convirtió en la aliada más buscada del uribismo en la segunda, del que ha sido cercana en el pasado (militó en el Partido de la U hasta 2009). Sin embargo, Marta Lucía Ramírez imprimió un carácter particular al endosar sus votos a Óscar Iván Zuluaga, pues se mostró prudente en la idea de que no necesariamente estaba a favor de concluir los diálogos con las FARC, sino de condicionarlos con hechos claros de paz, idea que finalmente Zuluaga adoptó. La posición de Ramírez, además de honesta, no deja de tener importancia al ser ella la primera y única mujer que ha desempeñado el Ministerio de Defensa en Colombia, justamente bajo el gobierno de Uribe entre 2002 y 2003. Posteriormente a la elección, aunque Zuluaga no alcanzó la presidencia, el impulso que recibió su candidatura con el apoyo de Ramírez fue importante y significó una alianza natural entre los sectores de centroderecha. Claro, aún está en manos del Partido Conservador consolidar de nuevo su rumbo.

Clara López / Polo Democrático Alternativo. La ex alcaldesa encargada de Bogotá también protagonizó una destacada campaña y obtuvo el 15,23% de la votación en primera vuelta, apenas un poco por debajo de Marta Lucía Ramírez. Es meritorio que dos mujeres hayan realizado dos campañas bien planteadas y con buenos resultados, que lograron conectar parte del electorado, en el caso de López desde el centroizquierda. Y aún más importante el mensaje de unidad de izquierda que convocó y que no se limitó a oxigenar la imagen y presencia del Polo Democrático Alternativo (PDA) tras la debacle de la alcaldía de Bogotá en manos de Samuel Moreno —que terminó en escándalo por corrupción, pleitos judiciales y sin concluirse—, sino que tuvo como fórmula vicepresidencial a Aida Avella, de la Unión Patriótica (UP). Recordemos la UP fue la plataforma política frustrada tras los intentos de negociación de paz de las FARC en la década de 1980, que terminó en una persecución política que costó la vida a miles de sus militantes por representantes de la extrema derecha. Meses antes la UP había recuperado

su personería jurídica como partido político y Avella regresado de un largo exilio en Europa, por lo que fue muy significativa la suma de estas dos mujeres representantes de la izquierda civil, favorables a un proceso de paz y críticas férreas tanto del uribismo como del santismo.

Aunque la UP no funciona como plataforma de las FARC —a pesar de las acusaciones y amenazas que aún recibe—, es importante destacar que las candidaturas de López y Avella respaldaron con coherencia la candidatura de Santos en la segunda vuelta debido a su apuesta por una salida negociada al conflicto armado, la consecución de la paz y la consolidación de una izquierda democrática, lo que le costó a Clara López dentro del Polo Democrático serios enfrentamientos con el sector del senador Jorge Robledo, quien ha preferido mantener una línea de oposición y distancia firme hacia el gobierno, por lo cual la posición de López no representó a la del partido. Anteriormente, por problemas de disciplina de partido, la propia facción del Partido Comunista había sido expulsada. De esta forma, aunque la izquierda tradicionalmente ha tendido a la fragmentación por razones políticas, personales, ideológicas y prácticas, el hecho de que el PDA y la UP hayan convergido es una muestra positiva de labor conjunta, que en todo caso asume el reto de hasta en qué medida puede llegar a tener cercanías con las posiciones que asuma una eventual labor política de las FARC en tiempos de paz.

Enrique Peñalosa / Partido Alianza Verde: El exalcalde de Bogotá es uno de los políticos con mayor prestigio a nivel de administración pública, por haber sido uno de los líderes en la positiva renovación urbanística y cultural que vivenció la capital en los últimos lustros —y que lamentablemente entró en una espiral de retroceso—. Sin embargo, Peñalosa, de manera ambivalente, se ha destacado también por jugar a dos bandas: entre la comodidad de obtener respaldos partidistas militando a tiempo parcial grupal, frente a la continua búsqueda del voto de opinión personalista basado en su imagen. Esta dualidad pasó su cuenta de cobro cuando para las elecciones presidenciales de 2010, tras haber sido integrante del Partido Verde —que respaldó junto a Luis Garzón y Sergio Fajardo la campaña de otro exalcalde de prestigio, Antanas Mockus—, se produjo su salida de este, que lo llevó de manera contradictoria a acercarse a Álvaro Uribe, a quien se supone había enfrentado a través de su entonces candidato Juan Manuel Santos. Desperdiçando su capital político, su segundo intento de regresar a la alcaldía de Bogotá se frustró luego, debido a una constante indefinición entre ser opositor o cercano de la derecha.

Esta inmadurez en términos ideológicos ha llevado a Peñalosa a desprestigiar públicamente la vida partidista, en un discurso que busca

defender el ideal de los «antipolíticos» surgidos en la década de 1990, que a pesar de dedicarse al oficio político parecieran minusvalorar una verdadera renovación colectiva pública, que pasa por los partidos y los alcances de su nacionalización para desarrollar formas de verdadera gobernabilidad. A pesar de estas contradicciones Enrique Peñalosa, tras imponerse con comodidad en una consulta interna frente a Camilo Romero y John Sudarsky, realizó una campaña con contenidos innovadores en materia de desarrollo, transporte público y modelos de gestión eficiente, que pueden llegar a aportar a la Colombia en posconflicto. Su candidatura, de hecho, respaldó la continuidad de los diálogos en Cuba con las FARC, con algunas sugerencias, pero al igual que el resto de opositores a Santos —con excepción de Zuluaga y en un grado menor la campaña de Clara López en cuanto a un enfoque crítico frente a la economía libre mercado— su diferenciación con el actual gobierno no fue radical. De allí que su campaña no logró ofrecer propuestas definitivas y no conectó con el electorado, que le otorgó al dubitativo verde (tan solo de nombre, pues al igual que el predecesor Partido Verde cualquier contenido central ecológico real y cercano a como se entienden estos partidos está ausente, siendo el color verde y unos trazos de amarillo solo una fachada) tan solo 8,28% en la primera vuelta.

AL

Polémica y apatía

Dos importantes cuestiones emergieron a la superficie y afectaron los comicios presidenciales: la polémica y la apatía. La primera se dio por la alta polarización entre las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, que llegó a desatar lecturas y ataques de suma cero, en una *guerra sucia* entre quienes defendían el proceso de paz y la reelección del presidente, y los que veían la negociación con las FARC como la claudicación ante el terrorismo y la entrega del país al llamado castrochavismo. No obstante, el lado más banal se dio con la entrada y salida del reconocido venezolano J. J. Rendón, opositor del régimen chavista, asesor de diferentes campañas ganadoras en países como Honduras o Panamá, y por haber sido artífice de la estrategia de Santos en 2010 que incorporó técnicas de propaganda negra. En esta ocasión, paradójicamente, la propaganda negra fue utilizada por el uribismo en contra de Rendón, exaltando el escándalo de supuestos ingresos de dineros ilegales de narcotraficantes a sus cuentas, lo que, aunque negado, terminó con la salida del psicólogo y experto en marketing político de la campaña santista. Quedó flotando el absurdo de que los mismos actuales uribistas que protestaron por la presencia de

Rendón fueron sus beneficiados y quienes alabaron su contratación y técnicas hace cuatro años.

Por otro lado, la abstención alcanzó a 60 % en la elección presidencial, un dato preocupante en un país que por su álgida agenda debería contar con mayor respuesta ciudadana y que tradicionalmente ha sido el único de América Latina en no introducir el penoso voto obligatorio, algo que ha llegado a proponerse intermitentemente dentro de una reforma política más amplia. Con 5,99 % en primera vuelta y 4,03 % en segunda, el voto en blanco llegó a esbozarse como el caballo de batalla de los inconformes, pero en todo caso cedió ante la urgencia de posicionarse en la segunda vuelta y sin alcanzar una mayoría absoluta, condición para forzar nueva ronda electoral. A pesar de la legítima expresión democrática que significa votar en blanco y la amenaza de convertirse en un movimiento ciudadano transitorio en términos de protesta ante la clase política tradicional, la inmadurez de algunos de quienes intentaron impulsarlo de modo populista hizo que recayera en una vacía propuesta pseudopartidista, que no prosperó, que aspiraba incluso a obtener reposición de ingresos por votos de las autoridades electorales.

Elecciones legislativas y sistema de partidos

Los resultados previos de los comicios legislativos, realizados el 9 de marzo, alentaron el escenario de polarización posterior de la campaña presidencial, que aún envuelve al gobierno de Juan Manuel Santos. Aunque este ha invitado a que sea *el Congreso de la paz*, continuando la actitud y labor legislativa favorable hacia un posconflicto que ya se había emprendido en el calendario previo, no se respira precisamente tranquilidad en su interior. Y esto en mayor parte se debe a la presencia de Álvaro Uribe, quien en un comportamiento atípico —que recuerda al siglo XIX, en el cual los expresidentes colombianos aún eran propensos a regresar a la arena política en la rama legislativa— lidera la coalición de derecha del Centro Democrático y enfrenta con vehemencia todas las posiciones de Santos como presidente y el desarrollo del proceso de paz con las FARC.

Se insistió en que sería un segundo gobierno de Santos débil, sin respaldos suficientes a nivel de bancada. Pero aunque el uribismo alcanzó la segunda posición de votos, los apoyos sumados del Partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical mantienen vivos los princi-

prios de la coalición presente desde su primer periodo.³ Aún más, parte del conservatismo, como se dijo, es indefinido pero sensible a las prebendas y acuerdos santistas, especialmente en el bloque costeño del norte del país, lo que aunque plantea posibles acuerdos con el Centro Democrático de Uribe no son fáciles de materializarse. A pesar de que el otro gran eje opositor lo constituye el ala liderada por Jorge Robledo del Polo Democrático, no se puede afirmar que Juan Manuel Santos cuente con un Legislativo en su contra, ya que en lo fundamental, en lo elegido, como se ha insistido en torno al tema de la paz, logró mejorar su imagen y consiguió los apoyos vigentes que aún lo alientan. Incluso el efecto del uribismo recalcitrante —como se vio en el debate en torno a su líder— es el de posicionar al resto de las fuerzas en contra de la derecha.

Esta nueva configuración del sistema de partidos colombiano no es del todo sorpresiva, sino que es resultado natural de la evolución de las variables institucionales y los actores políticos en los últimos años. En efecto, resultó que los partidos políticos en Colombia, después de todo, son importantes. A pesar del desprestigio, como instituciones que sirven de puentes entre la sociedad civil y el Estado no han perdido su justificación teórica, y esto ha provocado una tendencia a volver a estudiarlos y entenderlos. Más allá de aciertos o errores, parece revalorarse el que para toda democracia representativa no sean por completo descartables. Dentro de esta corriente Francisco Gutiérrez (2007) reflexionó sobre la relación entre partidos y democracia desde 1958 a 2002, es decir, desde el Frente Nacional (1958-1974) hasta la aparición de la era Uribe, en un esfuerzo por abordar una perspectiva más amplia, que no necesariamente estancara el análisis causal a la alternancia bipartidista pactada del pasado o tuviera que partir una vez más de la violencia política de mitad de siglo xx. Mejor, pretendió aprovechar ese pasado para entender el país que se decantó en el nuevo milenio, en el que un vertiginoso huracán de cambios sociales a lo largo de cuatro décadas arrancó de cuajo a la Colombia tradicional y abrió el sistema de partidos.

Más allá de la crítica, implica aceptar que por encima del ideal los partidos han existido. Esto obliga a revisar primero los presupuestos teóricos de autores como Maurice Duverger, Giovanni Sartori o Klaus

3 El resultado en porcentajes de la elección de los 102 senadores y 166 representantes a la Cámara fueron: Partido de la U (18,9%), Centro Democrático (17,34%), Partido Conservador (16,21%), Partido Liberal (14,54%), Cambio Radical (8,27%), Alianza Verde (4,65%), Polo Democrático (4,43%), Opción Ciudadana (4,40%), MIRA (2,66%). Véase, Registraduría Nacional del Estado Civil, <http://www.registraduria.gov.co>.

von Beyme, para quienes los partidos cumplen la función de agregar intereses ciudadanos. En el caso colombiano, el sistema de partidos, una vez abierto con el impulso del proceso de paz más importante conseguido frente a un grupo armado —el de la guerrilla del M-19 en 1990—, tuvo una hiperfragmentación tras la Constitución de 1991, cuando al pretenderse la mayor representación posible y limitar el bipartidismo tradicional heredado del siglo XIX, se hizo posible por vía electoral la emergencia de partidos pasajeros, listas dispersas y las mal llamadas figuras «antipolíticas» que, como todo político —aun sin partido—, han perseguido el poder. Esta situación se corrigió parcialmente con la reforma política de 2003, recalcando lo que Sartori llamaría un sistema de partidos fluido, es decir, uno nuevo aún no institucionalizado.

En este contexto fue que Álvaro Uribe, proveniente de los partidos tradicionales, pudo triunfar *con* y *sin* ellos, condicionando a la vez la supervivencia de las fuerzas liberal y conservadora al centro. Asomó entonces una nueva cara en el espectro ideológico: la tan anhelada izquierda democrática, representada por el Polo Democrático Alternativo una vez el M-19 fracasó en su intento. Este sistema no ha logrado institucionalizar unos partidos fuertes o al menos mejores alrededor de un *pluripartidismo moderado*, pero se advierte al menos una mayor claridad ideológica para un escenario representativo en una etapa posconflicto. Ahí reside el desafío, porque más allá de un sistema presidencial o de una arquitectura institucional que tendiese a un modelo parlamentario, los partidos seguirán siendo necesarios. Una pregunta decisiva es entonces: ¿cuál sería el modelo de inserción política a seguir de las FARC tras una eventual consolidación del proceso de paz?

En esa medida las FARC, según experiencias de paz e inclusión política en la región, de antiguos grupos guerrilleros como en Uruguay (MLN-T), El Salvador (FMLN) o el propio M-19 en Colombia, tendría tres opciones básicas (Cepeda, 2009): 1. liderar su propio partido político; 2. fomentar una multicoalición de izquierda; 3. buscar un modelo de alianzas moderadas que permitan incluso recurrir a figuras externas apostando al mediano y largo plazo. Y no son pocos los retos para la sociedad civil, en la medida que la nación debería aprender del momento histórico que atraviesa y abandonar cierta pasividad. El complemento teórico de una democracia participativa y el papel de las organizaciones que no persiguen el voto existe (Cepeda, 2011). Pero ya lo decía Leslie Lipson, para bien o para mal, en 1969: «Los partidos son en un Estado democrático el punto donde convergen todas las fuerzas políticas».

Conclusión: la trascendencia de unas elecciones que no son de apertura

Una característica que es necesario recordar del actual proceso de diálogo del gobierno con la terca y longeva guerrilla de las FARC es que en la eventualidad de superarse la agenda de negociación y firmar un acuerdo definitivo, la ciudadanía deberá mediante un plebiscito o consulta popular dar su aprobación final. De allí que el presidente Juan Manuel Santos, a modo de defensa ante los críticos que dicen que se estaría negociando un acuerdo a espaldas del país, haya repetido: «nada está acordado mientras no esté acordado todo».

Pero se hace necesario retomar la pregunta inicial: ¿se podrían considerar los comicios presidenciales de 2014 en Colombia como unas elecciones de apertura? Técnicamente tendríamos que decir que no. Colombia, a pesar del esfuerzo por alcanzar la paz, tras un largo y difícil camino en un proceso que avanza, como lo señalaron Gehring y Cuervo (2013) «entre la esperanza y el escepticismo», no es un país que esté saliendo de una dictadura o viviendo una transición democrática desde un sistema autoritario. Por el contrario: se encuentra afirmando las reglas del Estado de derecho y la democracia liberal constitucional, bajo las que se ha esforzado por suscribirse —a pesar de todos sus problemas— desde su independencia de España, iniciada en 1810, como ya lo confirmó en el proceso constituyente que produjo la Constitución de 1991.

Hay que señalar que tampoco la reelección de Juan Manuel Santos como presidente se trató técnicamente de un plebiscito, como el que justamente podría llegar a refrendar el propio acuerdo con las FARC. Sin embargo, en cualquier caso, sí podemos aceptar que fue un termómetro y un respaldo democrático activo sobre el rumbo que la mayoría de electores quieren para el país, el tipo de alianzas que los líderes y los partidos políticos vigentes están dispuestos a asumir y, finalmente, una redefinición mucho más clara del espectro ideológico y de lo que sería deseable o no aceptable en términos de alcanzar la paz y la superación del conflicto armado interno por más de cinco décadas.

Así los comicios, de manera correspondiente, se dividieron en dos momentos: primero cuando el electorado tendió a votar en primera vuelta por el candidato, el partido o la propuesta que en realidad consideraba la más indicada; y segundo cuando en segunda vuelta la elección tendió a ser estratégica y Santos trasladó votos a su favor —directa o indi-

AL

«Este sistema no ha logrado institucionalizar unos partidos fuertes o al menos mejores alrededor de un pluripartidismo moderado»

rectamente y en contraste a las posiciones del uribismo— de ciudadanos que, incluso, en otras condiciones jamás hubieran votado por él. La elección final de la paz, más que la del presidente, demuestra que los colombianos desean llenar de contenido un mandato de convivencia que es constitucional, y hacer que su democracia vaya más allá del plano formal.

Las preguntas que quedan por resolverse son entonces si Colombia alcanzará la paz y si será capaz de detener el conflicto armado con las FARC durante el gobierno de Santos. Y si, además de no dejar por fuera a la segunda guerrilla persistente, el ELN, internamente las fuerzas políticas, comenzando por el centroderecha en manos de Santos y Uribe, están dispuestas a apoyarse en un proceso conjunto de reconciliación nacional. Solo de esta manera una paz tanto centrípeta como centrífuga podrá sentar las bases del tan anhelado escenario de posconflicto, una reconstrucción que podrá durar tanto o más que la presente guerra en Colombia.

Bibliografía

- GALTUNG, Johan (1969), «Violence, Peace, and Peace Research», en *Journal of Peace Research*, vol. 6, n.º 3, pp. 167-191, Oslo, International Peace Research Institute. Disponible en <http://www.jstor.org/pss/422690>.
- GEHRING, Hubert, Margarita CUERVO (2013), «Colombia: un largo y difícil camino hacia la paz», en *Länderbericht*, mayo, Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung. Disponible en www.kas.de/kolumbien.
- CEPEDA JIMÉNEZ, José Alejandro (2009), Conflict Resolution, Political Inclusion, and Party Systems: The Cases of Colombia (M-19), El Salvador (FMLN), and Uruguay (Tupamaros) in Compared Perspective, ponencia en el XXI World Congress of Political Science, International Political Science Association (IPSA), Santiago de Chile. Texto en castellano: <http://paperroom.ipsa.org/papers/view/1728>.
- (2011), «Democracia representativa vs. democracia participativa: Un análisis bajo la luz del bicentenario de independencia de Colombia (1810-2010)», en *Revista Centro de Estudios Políticos*, Bogotá, Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, Dirección para la Democracia y Participación Ciudadana, julio-diciembre, <http://www.centrodeestudiospoliticos.com/descargas/4.2.pdf>.
- CEPEDA ULLOA, Fernando (2005), «El marco jurídico para el proceso de paz en Colombia», en Fridé, A European Think Tank For Global Action, <http://www.fride.org/publicacion/107/el-marco-juridico-para-el-proceso-de-paz-en-colombia>.

- GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA (GMH) (2013), *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*, <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-memorias-guerra-dignidad-12-sept.pdf>.
- GUTIÉRREZ SANÍN, FRANCISCO (2007), *¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia (1958-2002)*, Bogotá, Grupo Editorial Normal.
- HUNTINGTON, SAMUEL (1991), *The Third Wave*. Londres, University of Oklahoma Press.
- LAMOUIER, BOLÍVAR (1984), «Opening through Elections: Will the Brazilian Case Become a Paradigm?», en *Government and Opposition*, vol. 19, n.º 2.
- MINISTERIO DEL INTERIOR, REPÚBLICA DE COLOMBIA (2012), *Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y Decretos Reglamentarios. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones*, Bogotá, Ministerio del Interior. Disponible en: <http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743d-b9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf>
- NOHLEN, DIETER (comp.) (1995), *Democracia y neocrítica en América Latina: En defensa de la transición*. Bogota-Fráncfort del Meno: Vervuert-Iberoamericana.
- (2011), «Sobredemocracia electoral. La importancia de lo electoral en el desarrollo político de América Latina», en: Luis Efrén Ríos VEGA (ed.), *Tópicos electorales*. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. 23-29.
- «Tierras, primer punto de la agenda con FARC», *El Tiempo*, 5.9.2012, <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12194473>.
- WIELAND, CARSTEN (2008), «Diez tesis sobre el cambio del conflicto en Colombia», en *Länderbericht*, noviembre, Berlín, Konrad Adenauer Stiftung. Disponible en: www.kas.de/kolumbien.